

recurso de alzada interpuesto contra el de diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y cuatro del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Madrid, recaído en la reclamación cuatro mil ciento veintitrés/setenta y dos denegatoria de la suspensión de la ejecución del acto administrativo correspondiente a la liquidación girada a dicho recurrente por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de mil novecientos setenta e importe de un millón doscientas noventa mil doscientas cuarenta y una pesetas; actos que declaramos se ajustan al ordenamiento jurídico; sin hacer expresa condena en costas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 24 de mayo de 1978.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Dionisio Martínez Martínez.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

19724 *ORDEN de 24 de mayo de 1978 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en recurso número 400/75, interpuesto por «Castilla».*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 28 de mayo de 1977 por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en recurso contencioso-administrativo número 400/75, interpuesto por «Castilla», Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo, contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 23 de febrero de 1975, en relación con el Impuesto sobre Sociedades-Primas de Seguros, correspondiente al ejercicio de 1969;

Resultando que la citada Audiencia se ha pronunciado sobre la cuestión debatida en los términos que se expresan en la parte dispositiva;

Considerando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105, 1.ª a), de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad «Castilla», Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha veintiséis de febrero de mil novecientos setenta y cinco, a que las presentes actuaciones se contraen, debemos de confirmar y confirmamos tal resolución por ser conforme a derecho, sin expresa imposición de costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 24 de mayo de 1978.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Dionisio Martínez Martínez.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

19725 *ORDEN de 24 de mayo de 1978 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en recurso número 725/75, interpuesto por «Inmobiliaria San Jacinto, S. A.».*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 27 de septiembre de 1977 por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en recurso contencioso-administrativo número 725/1975, interpuesto por «Inmobiliaria San Jacinto, S. A.» contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 1 de julio de 1975, en relación con el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 1969 —suspensión—;

Resultando que la citada Audiencia se ha pronunciado sobre la cuestión debatida en los términos que se expresan en la parte dispositiva;

Considerando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105, 1.ª a), de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso interpuesto por «Inmobiliaria San Jacinto, S. A.», contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de uno de julio de mil novecientos setenta y cinco, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por dicha Entidad

contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Madrid de doce de febrero de mil novecientos setenta y cinco, que a su vez denegó la suspensión de la ejecución de la liquidación girada a dicha Entidad por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio mil novecientos sesenta y nueve, declarando que el acto impugnado es conforme a derecho y sin hacer expresa condena en costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 24 de mayo de 1978.—P. D., el Subsecretario de Hacienda Dionisio Martínez Martínez.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

19726 *ORDEN de 24 de mayo de 1978 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, en recurso número 539/1974, interpuesto por «Mutua Ilicitana», Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo número 48.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 18 de marzo de 1975 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia en recurso contencioso-administrativo número 539/74, confirmada en todas sus partes por la del Tribunal Supremo de 12 de abril de 1977, interpuesto por «Mutua Ilicitana», Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo número 48, contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 9 de julio de 1974, relativo al Impuesto sobre Sociedades, correspondientes al ejercicio de 1969;

Resultando que la citada Audiencia se ha pronunciado sobre la cuestión debatida en los términos que se expresan en la parte dispositiva;

Considerando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105, 1.ª a), de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando, como estimamos, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por «Mutua Ilicitana» Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo número cuarenta y seis, contra Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central, de nueve de julio de mil novecientos setenta y cuatro, resolviendo recurso de alzada promovido contra fallo del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Alicante, de treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y dos sobre liquidación definitiva por el Impuesto sobre Sociedades, gravamen sobre primas de Mutuas de Seguros, ejercicio de mil novecientos sesenta y nueve, ascendente en total a un millón cuatrocientas ochenta y cuatro mil trescientas ochenta y cinco pesetas, debemos declarar y declaramos dichos acuerdos y liquidación contrarios a derecho y, consecuentemente, los anulamos, dejándolos sin valor ni efecto alguno, con condena a la Administración demandada a la devolución a aquella de la parte correspondiente a las cuotas ingresadas; todo ello sin hacer expresa imposición de las costas en esta instancia.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 24 de mayo de 1978.—P. D., el Subsecretario de Hacienda Dionisio Martínez Martínez.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

19727 *ORDEN de 24 de mayo de 1978 por la que se dispone la ejecución de sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, en el recurso número 477/74, interpuesto por «Mutua Industrial Castellonense», M.P.A.T.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 27 de mayo de 1975 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, visto asimismo el auto dictado por esta Sala con fecha 4 de junio de 1975, confirmados en todas sus partes por la del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1977, en recurso contencioso-administrativo número 477/74, interpuesto por «Mutua Industrial Castellonense», M.P.A.T., contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 4 de junio de 1974, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicios de 1968 a 1970;

Resultando que la citada Audiencia se ha pronunciado sobre la cuestión debatida en los términos que se expresan en la parte dispositiva;

Considerando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105, 1.ª, de la Ley de 27 de diciembre de 1958.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando, como estimamos, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Mutua Industrial Castellonense", Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo número doscientos treinta y seis, resolviendo recurso de alzada promovido contra fallo del Tribunal Económico-Administrativo Central de cuatro de junio de mil novecientos setenta y cuatro, desestimatorio del recurso de alzada interpuesto por la recurrente, contra otro del Tribunal Provincial de Castellón de diez de octubre de mil novecientos setenta y tres, sobre liquidación provisional por el Impuesto sobre Sociedades—gravamen sobre primas de Mutuas de Seguros— correspondiente a los ejercicios de mil novecientos sesenta y ocho, mil novecientos sesenta y nueve y mil novecientos setenta, debemos declarar y declaramos dichos acuerdos y liquidación contrarios a derecho, y consecuentemente, los anulamos, dejándoles sin valor ni efecto alguno, ordenando a la administración se cancele la fianza o aval bancario constituido en el exdiente administrativo para la suspensión del acto impugnado, todo ello sin hacer expresa imposición de las costas en esta instancia.»

Posteriormente, dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó auto de fecha 4 de junio de 1975, en el que la Sala dijo:

«Que debía aclarar y aclaraba la sentencia dictada en estos autos en el sentido de sustituir el particular del fallo que dice "ordenando a la Administración se cancela la fianza o aval bancario constituido en el expediente administrativo para la suspensión del acto impugnado" por lo siguiente "ordenando a la Administración devuelva a la Entidad recurrente la cantidad de ochocientos setenta y dos mil setecientos ochenta y ocho pesetas, satisfechas en virtud de la liquidación anulada".»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 24 de mayo de 1978.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Dionisio Martínez Martínez.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

19728

ORDEN de 12 de junio de 1978 por la que se conceden a la Empresa «José Pesquer Lanao» los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre.

Ilmo. Sr.: El Decreto 2225/1968, de 14 de septiembre, declaró como zona de preferente localización industrial la de regadío del Valle del Cinca, estableciendo la concesión de beneficios fiscales conforme a lo previsto en el artículo 3.º de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, para las Empresas que se dediquen a las actividades protegidas que señala.

El Ministerio de Industria y Energía, en Orden de 11 de mayo de 1978, aceptó la solicitud formulada por la Empresa «José Pesquer Lanao» para el traslado y ampliación del taller de carpintería de madera al polígono industrial de Barbastro, expediente VC-27, clasificándola en el grupo C) a efectos de los beneficios que se expresan en el anexo de la Orden de 8 de mayo de 1978, por la que se convocó el oportuno concurso.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.º de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y en el Decreto 2225/1968, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.—Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada tributo, a las específicas del régimen que deriva de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la Empresa «José Pesquer Lanao», y por un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Orden, los siguientes beneficios fiscales:

Uno. Reducción del 50 por 100 de los impuestos siguientes:

a) Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la forma establecida en el artículo 66, número 3, del texto refundido aprobado por Decreto 1018/1967, de 8 de abril.

b) Derechos arancelarios e Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores que gravan la importación de bienes de equipo y utillaje cuando no se fabriquen en España y los materiales y productos que no produciéndose en España se importan para su incorporación en primera instalación a bienes de equipo de fabricación nacional. El plazo de cinco años para el disfrute de esta reducción se contará, en su caso, a partir del primer despacho provisional que conceda la Dirección General de Aduanas, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 4 de marzo de 1976.

c) Impuesto sobre las Rentas del Capital que grave los rendimientos de los empréstitos que emita la Empresa española y de los préstamos que la misma concierte con Organismos internacionales o con Bancos e instituciones financieras extranjeras, cuando los fondos así obtenidos se destinen a financiar inversiones reales nuevas. La aplicación concreta de este beneficio a las operaciones de crédito indicadas se solicitará en cada caso mediante escrito dirigido al Director general de Tributos, acompañado de la documentación reseñada en la Orden ministerial de 11 de octubre de 1965.

Dos. Libertad de amortización durante el primer quinquenio, computado a partir del comienzo del primer ejercicio económico en cuyo balance aparezca reflejado el resultado de la explotación industrial de las nuevas instalaciones o ampliación de las existentes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto-ley 18/1976, de 8 de octubre, para tener derecho al disfrute de los beneficios anteriormente relacionados, la Empresa interesada habrá de estar sometida al régimen de estimación directa o estimación objetiva singular en la determinación de sus bases imponibles.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume la Empresa beneficiaria, así como de los objetivos a que se refiere el Decreto 2225/1968, dará lugar, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2853/1964, y artículo 9.º de la Ley 152/1963, a la privación de los beneficios concedidos y, en su caso, al abono o reintegro de los impuestos bonificados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 12 de junio de 1978.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Dionisio Martínez Martínez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

19729

ORDEN de 12 de junio de 1978 por la que se conceden a la Empresa «Joaquín Viera Domínguez» los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.

Ilmo. Sr.: El Decreto 1882/1968, de 27 de julio, declaró de preferente localización industrial la zona de la provincia de Cáceres, estableciendo la concesión de beneficios fiscales conforme a lo previsto en el artículo 3.º de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre.

El Ministerio de Industria y Energía en Orden de 11 de mayo de 1978, aceptó la solicitud formulada por la Empresa «Joaquín Viera Domínguez» para el traslado y ampliación del taller de carpintería y cerrajería en Aldea Moret (Cáceres), clasificándola en el grupo A) a los efectos de los beneficios que se expresan en el anexo de la Orden de 8 de mayo de 1978, por la que se convocó el oportuno concurso.

Este Ministerio a propuesta de la Dirección General de Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.º de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y en el Decreto 1882/1968, de 27 de julio, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.—Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada tributo, a las específicas del régimen que se deriva de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la Empresa «Joaquín Viera Domínguez», y por un plazo de cinco años, contados a partir de la publicación de la presente Orden, los siguientes beneficios fiscales:

Uno. Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la forma establecida en el número 3 del artículo 66 del texto refundido de dicho impuesto, aprobado por Decreto 1018/1967, de 8 de abril.

Dos. Libertad de amortización durante el primer quinquenio, a partir del comienzo del primer ejercicio económico en cuyo balance aparezca el resultado de la explotación industrial de las nuevas instalaciones o ampliación de las existentes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto-ley 18/1976, de 8 de octubre, para tener derecho al disfrute de los beneficios anteriormente relacionados, la Empresa interesada habrá de estar sometida al régimen de estimación directa o estimación objetiva singular en la determinación de sus bases imponibles.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume la Empresa beneficiaria, dará lugar a la aplicación, según los casos, de las medidas previstas en el artículo 22 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 12 de junio de 1978.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Dionisio Martínez Martínez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.